

Las manifestaciones territoriales de la polarización

Margarita López Maya
Agosto 2003

Las manifestaciones realizadas por la oposición en meses pasados, conocidas como “catiazo”, “petarazo”, “vargazo” y afines, viene a ser una muestra más de cómo la polarización social y política viene afectando nuestras vidas. El argumento para desarrollar estos eventos en espacios públicos urbanos donde los partidos y grupos de oposición han tenido poco respaldo político merece ser analizado con cuidado, pues si bien esconde su verdad, se trata en este caso de sólo una media verdad que esconde su trampa. Declaraba en junio el diputado César Pérez Vivas, secretario general del partido socialcristiano Copei, que el derecho a manifestar es de todos y los espacios públicos también. Se trataría pues -según él- de ejercer los derechos que les corresponden.

La afirmación copeyana, y de la oposición en general, sería válida si la sociedad venezolana y particularmente los habitantes de la ciudad de Caracas no hubiesen sido sometidos en el año 2002 y parte del 2003 a situaciones insurreccionales por parte de las diversas organizaciones de oposición que se juntaron en la llamada Coordinadora Democrática. Seamos claros, las insurrecciones vividas, el golpe del 11 de abril y la huelga general con paro petrolero incluido de diciembre 2002- febrero 2003 significaron acciones subversivas de parte de sus protagonistas ante el poder constituido democráticamente en Venezuela. Al insurreccionarse en abril con el paro indefinido, la marcha y el golpe de Estado del 11 y luego, de nuevo, en el paro general y petrolero de diciembre, la oposición no siguió el marco jurídico vigente, sino que apeló a métodos de fuerza para salir del Presidente. La oposición y sus dirigentes asumieron conscientemente ponerse “al margen de la ley”.

Toda situación insurreccional como las vividas en Venezuela tiene entre sus diversas y complejas dimensiones una espacial. Ello ocurre porque el poder

“alzado” está tratando de construir un poder “alternativo”. El caso de las FARC colombianas está a la vista, pero también se pueden dar muchos otros ejemplos: cuando la guerra civil española los poderes enfrentados tenían sus territorios donde ejercían control y gobierno; cuando la revolución mexicana también y así mismo durante la revolución francesa. Los alzados buscan crear otra soberanía y para ello requieren de un “territorio liberado”.

Este territorio liberado apareció muy claramente en la ciudad de Caracas en el segundo semestre del año 2002 con los militares de Altamira. Eran, recordémoslos, 13 oficiales activos, que estuvieron comprometidos en el golpe de Estado de abril, que vestidos con el uniforme del componente al que pertenecían, dieron el 22 de octubre una rueda de prensa y se trasladaron a la plaza Francia, más conocida como plaza Altamira, que declararon explícitamente como "territorio liberado". Los militares pasaron esa tarde haciendo llamados a los adversarios de Chávez a rebelarse y desconocer el gobierno. Anunciaron que se amparaban en el artículo 350 de la Constitución que indica que “El pueblo de Venezuela...desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraría los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos”. Alegaban que el Presidente era un dictador, de naturaleza castro-comunista. Al saberse de este pronunciamiento, una multitud se agolpó en el lugar para apoyarlos. A partir de ese momento, y con el apoyo de los grupos de oposición, emergía un espacio insurreccional en el este de la ciudad de Caracas. Poco después, el alcalde de ese municipio y el gobernador al cual pertenece el municipio, señalaban su autonomía para administrar y controlar ese territorio. Las policías respectivas, que ya habían evidenciado su polarización cuando menos desde abril, fueron puestas al servicio de este embrión de poder alternativo.

Pero el fenómeno de la territorialización insurreccional no fue sino una nueva fase –la más radical y violenta- de la polarización de los espacios urbanos venezolanos que se viene desarrollando en nuestro país desde mucho tiempo atrás. El empobrecimiento de los venezolanos sufrido ininterrumpidamente desde

hace ya 20 años ha ido reconfigurando los paisajes urbanos de nuestras ciudades: los espacios de los barrios donde viven nuestros sectores de menos recursos y donde las clases medias y altas jamás ponen un pie, son vistas por éstos como misteriosas y peligrosas; las urbanizaciones de las clases medias y altas, en contraste, son lugares donde el imaginario popular llena de fantasías de opulencia y corrupción. Hace 30 o 40 años estos espacios no estaban tan segregados como lo están ahora, los contactos entre clases eran más frecuentes, bien en eventos de calle o en las escuelas y universidades públicas donde convergían los jóvenes de todos los estratos sociales. Ahora los puntos de conexión entre clases se restringen al servicio doméstico que va a la casa del este o sureste, algún que otro servicio que personas de los sectores populares dan a las clases pudientes, pero son mundos que no se tocan en la cotidianidad. Y lo que es peor, se temen mutuamente.

Esa expresión territorial de la polarización social es la base de la territorialización de la polarización política. La plaza frente al edificio de Pdvsa en Chuao, bautizada como Plaza de la Meritocracia, fue el primer lugar simbólico del territorio del “nosotros” de la oposición. Está en el sureste, sumergido en una urbanización de las clases medias y representaba a quienes se confrontaban contra el poder constituido que está en el oeste. Cuando se anunció desde ese lugar que la marcha del 11 de abril tomaba rumbo al Palacio Presidencial de Miraflores, los simpatizantes del gobierno rodearon el palacio para proteger a “su” Presidente. Lo mismo hizo la Guardia Nacional y Policaracas. La agudización de la polarización política en los meses siguientes profundizó esta dimensión territorial del conflicto, que dividió y subdividió a Caracas entre los bandos y extendió su lógica a otras ciudades. La ciudad venezolana se territorializó políticamente entre espacios de quienes apoyan al gobierno y espacios de quienes apoyan a la oposición. La declaración de “territorio liberado” en octubre por parte de los militares fue un punto de inflexión pues asoció la territorialización política ya existente con la estrategia insurreccional de la oposición. En diciembre y enero asistimos a las escaramuzas de la oposición tratando de ganarle “territorios” al

otro: confrontación y violencia entre ambos bandos en El Valle, en la plaza de la Candelaria, en la avenida de Los Ilustres, etc. Los simpatizantes del gobierno, por su parte, erigieron barricadas en el edificio Pdvsa La Campiña, pancartas de denuncia y actos públicos en la plaza Bolívar, en puente Llaguno y así.

Con la firma en mayo del acuerdo entre gobierno y oposición se ha llegado al compromiso de dejar atrás las estrategias insurreccionales. Ambos rivales acordaron respetar las reglas de juego explícitas de la Constitución de 1999 y el marco jurídico vigente. Es un paso importante en la dirección correcta. No más insurrecciones, no más procedimientos subversivos, no más violencia. Sin embargo, la polarización territorial, como todas las otras dimensiones de la polarización política extrema que hemos vivido, no se puede desmontar sólo con una declaración escrita. Hace falta que las organizaciones y dirigentes que llegaron a ese compromiso hagan efectiva y concreta su palabra. La pregunta es ¿cómo?

La “desterritorialización” del conflicto significa recuperar para todos nuestros espacios públicos para la convivencia en paz. Significa que nuestras ciudades y sus espacios públicos dejen de ser posiciones de grupos rivales y pasen a ser de todos sus vecinos. Que no tengamos que sentirnos amenazados o agredidos por nuestras convicciones políticas cuando transitamos la plaza Bolívar o la plaza Francia, que no tengamos miedo en el Bulevar de Catia o en los restaurantes del este de la capital. Pero eso va a ser el resultado de un proceso largo donde los políticos y medios de comunicación que han manipulado a la ciudadanía a favor de la polarización den el ejemplo y envíen las señales que manifiesten con claridad que el juego político no pasa por una lógica “territorial”. Cuando concejales, alcaldes y gobernadores de diferente tendencia política sean capaces de citarse en uno u otro territorio, cuando los políticos de las opuestas toldas políticas puedan realizar actos en unos y otros territorios de la ciudad, cuando las organizaciones vecinales del este sean capaces de invitar a sus homólogos de los sectores populares a dialogar en sus espacios y viceversa, y cuando los medios

publiciten

profusamente estos gestos y señales, comenzaremos a salir de la pesadilla que los caraqueños, maracuchos y vecinos de otras ciudades urbanas hemos vivido.

Por ello, el discurso del diputado Pérez Vivas de Copei en aquella oportunidad era una media verdad y escondía una trampa, pues mientras él afirmaba que la calle es de todos –lo cual es verdad- en esos mismos días el ex candidato presidencial de su partido, Oswaldo Álvarez Paz, desde el Bloque Democrático llamaba de nuevo a la insurrección de los militares. Si bien la calle es de todos, el derecho a protestar y a transitar es de todos, los partidos y políticos que organizan estos eventos deben enviar las señales correctas de que están ejerciendo una política apegada a la ley y no insurreccional como en el pasado. En el contexto actual, con declaraciones contradictorias, con traumas sin cicatrizar, cómo entender sino como insurreccional los llamados a “conquistar” a Petare o a Catia hechas por Copei, AD o la CTV. Términos como “conquista” o “reconquista” son más propios de confrontaciones bélicas que de debates políticos democráticos y presuponen desplazar al “otro” para ocupar “yo” ese territorio. Ante una insurrección, el adversario responde defendiéndose y contraatacando. Y eso a mi modo de ver hicieron catieños y petareños y harán vecinos de otros espacios que en su mayoría apoyan al gobierno y se sienten amenazados y agredidos por los grupos de oposición.

Los políticos, como todo ciudadano, deben asumir la responsabilidad de sus actos. Firmaron en mayo un acuerdo ante organismo internacionales comprometiéndose a respetar la ley, ¿fue mera retórica? ¿Hipocresía? La vuelta a la ruta democrática pasa por enviar señales claras de que se han desechado las estrategias insurreccionales. Discursos, actos y gestos cónsonos con lo firmado en mayo por los rivales políticos es lo que necesitamos. Comportamientos sensibilizados por los traumas vividos por los vecinos de las urbes es lo que exigimos. No actos de agresión mutua dentro de la lógica de la territorialización de la polarización. Afortunadamente, después de las lamentables consecuencias ocasionadas por esta estrategia de confrontación, en las semanas recientes la

oposición parece abandonar esta forma de lucha. Lo poco nutrido de las manifestaciones últimas, aunque refleja un fenómeno más complejo que éste de la territorialización de la polarización política, también está expresando el repudio y el temor que este estilo político provoca entre la mayoría de los ciudadanos.